



Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

RESOLUCIÓN N° 000481-2024-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA

Expediente : 04307-2023-JUS/TTAIP
Recurrente : **JORGE SALVATORE MEDINA ROMERO**
Entidad : **INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “GILDA
LILIANA BALLIVIÁN ROSADO”**
Sumilla : Declara fundado recurso de apelación

Miraflores, 05 de febrero de 2024

VISTO el Expediente de Apelación N° 04307-2023-JUS/TTAIP de fecha 05 de diciembre de 2023, interpuesto por **JORGE SALVATORE MEDINA ROMERO**, contra la denegatoria por silencio administrativo negativo de su solicitud de acceso a la información pública presentada ante el **INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “GILDA LILIANA BALLIVIÁN ROSADO”**, con fecha 19 de octubre de 2023, de acuerdo a lo señalado por el recurrente.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de octubre de 2023, el recurrente solicitó a la entidad, la siguiente información:

“(…) los Sílabos de Administración de Empresas, Contabilidad, Computación e Informática, Construcción Civil, Electrónica Industrial, Electrotecnia Industrial, Mecánica de Producción, Mecánica Automotriz de los 6 Ciclos. I, III, y V Ciclo del Semestre 2023-I; II, IV y VI Ciclo del Semestre 2023-II”.

Con fecha 05 de diciembre de 2023, el recurrente interpuso el recurso de apelación materia de análisis, al no recibir respuesta de la entidad y considerar denegada su solicitud en aplicación del silencio administrativo,

Mediante la Resolución N° 000258-2024-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA¹, se admitió a trámite el referido recurso impugnatorio y se requirió a la entidad la remisión del expediente administrativo generado para la atención de la solicitud del recurrente, así como la formulación de sus descargos los cuales, a la fecha del vencimiento del plazo otorgado y de la emisión de la presente resolución, no se han presentado.

¹ Resolución de fecha 22 de enero de 2024, debidamente notificada a la entidad con fecha 25 de enero de 2024.

II. ANÁLISIS

El numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido, con excepción de aquellas informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

A su vez, el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS², establece que toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones de ley, teniendo las entidades la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Transparencia establece que las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control; asimismo, para los efectos de la referida ley, se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.

Cabe anotar que el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Transparencia, establece que la denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser fundamentada por las excepciones de ley, agregando el primer párrafo del artículo 18 de la referida norma que las excepciones establecidas en los artículos 15, 16 y 17 del mismo texto son los únicos supuestos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretadas de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental.

2.1. Materia en discusión

De autos se advierte que la controversia radica en determinar si la información solicitada es de carácter público; y en consecuencia, corresponde su entrega.

2.2. Evaluación

Conforme con lo dispuesto por las normas citadas y en aplicación del principio de publicidad, toda información que posean las entidades que conforman la Administración Pública contenida en documentos escritos o en cualquier otro formato es de acceso público, por lo que las restricciones o excepciones injustificadas a su divulgación menoscaban el derecho fundamental de toda persona al acceso a la información pública.

Con relación a dicho principio, el Tribunal Constitucional ha señalado, en el Fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente N° 3035-2012-PHD/TC, que: *“De acuerdo con el principio de máxima divulgación, la publicidad en la actuación de los poderes públicos constituye la regla y el secreto, cuando cuente con cobertura constitucional, la excepción (STC N.° 02579-2003-HD/TC), de ahí que las excepciones al derecho de acceso a la información pública deben ser interpretadas de manera restrictiva y encontrarse debidamente fundamentadas”*.

² En adelante, Ley de Transparencia.

En ese contexto, el Tribunal Constitucional ha precisado que les corresponde a las entidades acreditar la necesidad de mantener en reserva la información que haya sido solicitada por el ciudadano, conforme se advierte del último párrafo del Fundamento 13 de la sentencia recaída en el Expediente N° 2579-2003-HD/TC:

“Como antes se ha mencionado, esta presunción de inconstitucionalidad se traduce en exigir del Estado y sus órganos la obligación de probar que existe un bien, principio o valor constitucionalmente relevante que justifique que se mantenga en reserva, secreto o confidencialidad la información pública solicitada y, a su vez, que sólo si se mantiene tal reserva se puede servir efectivamente al interés constitucional que la justifica. De manera que, si el Estado no justifica la existencia del apremiante interés público para negar el acceso a la información, la presunción que recae sobre la norma o acto debe efectivizarse y, en esa medida, confirmarse su inconstitucionalidad; pero también significa que la carga de la prueba acerca de la necesidad de mantener en reserva el acceso a la información ha de estar, exclusivamente, en manos del Estado” (subrayado agregado).

En ese sentido, de los pronunciamientos efectuados por el Tribunal Constitucional antes citados, se infiere que toda información que posean las entidades de la Administración Pública es de acceso público; y, en caso dicha información corresponda a un supuesto de excepción previsto en los artículos 15 a 17 de la Ley de Transparencia, constituye deber de las entidades acreditar dicha condición, debido a que poseen la carga de la prueba.

De autos se aprecia, que el recurrente solicitó a la entidad “*los Sílabos de Administración de Empresas, Contabilidad, Computación e Informática, Construcción Civil, Electrónica Industrial, Electrotecnia Industrial, Mecánica de Producción, Mecánica Automotriz de los 6 Ciclos. I, III, y V Ciclo del Semestre 2023-I; II, IV y VI Ciclo del Semestre 2023-II*”; y la entidad no brindó atención en el plazo de ley.

Ante ello, el recurrente interpuso el presente recurso de apelación y la entidad, pese a estar debidamente notificada, no presentó descargos ante esta instancia.

En dicho contexto, al no haber brindado respuesta a la solicitud de información ni haber remitido sus descargos, la entidad no ha negado la posesión de dicha documentación, ni ha alegado tampoco la existencia de una causal de excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información pública contemplado en la Ley de Transparencia, a pesar de tener la carga de acreditar dichas circunstancias, por lo que la Presunción de Publicidad respecto del acceso a dicha documentación se encuentra plenamente vigente al no haber sido desvirtuada por la mencionada entidad, máxime si lo requerido son documentos propios de la entidad como instrumentos públicos requeridos para el desarrollo de los temas académicos brindados.

En consecuencia, corresponde declarar fundado el recurso de apelación y disponer la entrega de la documentación solicitada en la forma requerida, tachando los datos personales de individualización y contacto de ser el caso, conforme artículo 19³ de la mencionada norma.

³ **“Artículo 19.- Información parcial**

En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, conforme a los artículos 15, 16 y 17 de esta Ley, no sea de acceso público, la entidad de la Administración Pública deberá permitir el acceso a la información disponible del documento”.

Finalmente, en virtud a lo dispuesto por los artículos 30 y 35 del Reglamento de la Ley de Transparencia, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, en aplicación de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, corresponde a cada entidad determinar la responsabilidad en que eventualmente hubieran incurrido sus funcionarios y/o servidores por la comisión de presuntas conductas infractoras a las normas de transparencia y acceso a la información pública.

De conformidad con lo previsto por el artículo 6 y el numeral 1 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación presentado por **JORGE SALVATORE MEDINA ROMERO**; en consecuencia, **ORDENAR** al **INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “GILDA LILIANA BALLIVIÁN ROSADO”**, que entregue la información pública solicitada por el recurrente, conforme a los fundamentos de la presente resolución.

Artículo 2.- SOLICITAR al **INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “GILDA LILIANA BALLIVIÁN ROSADO”**, que, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, acredite la entrega de la información solicitada por **JORGE SALVATORE MEDINA ROMERO**.

Artículo 3.- DECLARAR agotada la vía administrativa al amparo de lo dispuesto en el artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Artículo 4.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la notificación de la presente resolución a **JORGE SALVATORE MEDINA ROMERO** y al **INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “GILDA LILIANA BALLIVIÁN ROSADO”**, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la norma antes citada.

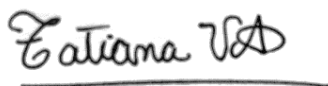
Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional (www.minjus.gob.pe).



ULISES ZAMORA BARBOZA
Vocal Presidente



LUIS AGURTO VILLEGAS
Vocal



TATIANA AZUCENA VALVERDE ALVARADO
Vocal

vp: lav